En pos de una economía de la memoria: el caso del Valle de los Caídos

SILVINA SCHAMMAH GESSER

Instituto Salti para el Estudio del Ladino, Universidad de Bar Ilán (Israel)
Instituto S. Harry Truman para la Promoción de la Paz, Universidad Hebrea de Jerusalén (Israel)
orcid.org/0000-0002-2449-8996

IRENE RINCÓN NARROS

Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo (ILC), CSIC (España)
orcid.org/0000-0003-0407-2514

Presentación: 6 mar. 2019 | Aceptación: 15 jun. 2020 | Publicación: 31 oct. 2020

Cita recomendada: Schammah Gesser, Silvina, y Irene Rincón Narros. 2020. «En pos de una economía de la memoria: el caso del Valle de los Caídos». *Dictatorships & Democracies. Journal of History and Culture* 8: 95–126. doi: <https://dx.doi.org/10.7238/dd.voi8.3186>

Resumen: Este artículo analiza las formas en que la memoria traumática colectiva se traduce, entre otros procesos, en bienes materiales. Sostenemos que la producción de memoria es también un proceso económico que involucra la inversión de recursos con la expectativa de obtener beneficios. Por lo tanto, las manifestaciones de la memoria pública (p. ej., fechas conmemorativas, monumentos, mausoleos, museos y espacios de conmemoración, así como actividades de infoentretenimiento que fusionan información, esparcimiento y consumo, publicaciones y representaciones artísticas, audiovisuales o literarias a gran escala) dependen de la asignación de recursos como tiempo, espacio y dinero. A pesar del estatus sin precedentes que los estudios de memoria han alcanzado dentro de las humanidades y las ciencias sociales, el carácter económico de la memoria, especialmente de la memoria traumática, ha recibido escasa atención (Shauli & Schammah Gesser 2016–2019). Si el recuerdo colectivo consume tiempo, espacio, insumos y otros recursos, y, además, produce no solo beneficios políticos, sociales, culturales y simbólicos, sino también económicos, resulta necesario investigar la gestión de su producción, de su mantenimiento y difusión, así como la de su mercantilización y consumo. A partir de estas premisas, el presente artículo ofrece una lectura económica del Valle de los Caídos.

Nota: Este artículo forma parte del proyecto *Does it Pay to Remember? The Economy of Memory in Comparative Perspective: Cases from Southeast Asia, South America and Southern Europe*, financiado por el Instituto S. Harry Truman para la Promoción de la Paz de la Universidad Hebrea de Jerusalén, codirigido con el Dr. Ran Shauli de la Universidad de Bar Ilán y desarrollado en Israel entre 2016 y 2019.

Palabras clave: economía de la memoria, Valle de los Caídos, topografía fascista, patrimonio, inversión, usufructo

Towards an economic reading of the Valley of the Fallen

Abstract: This article analyzes the ways in which collective traumatic memory translates, among other processes, into material goods. We claim that memory production is also an economic process that involves the investment of resources with the expectation of obtaining benefits. Therefore, manifestations of public memory (e. g., commemorative dates, monuments, mausoleums, museums and commemoration spaces, as well as large-scale educational activities, publications and artistic, audio-visual or literary representations) depend on the allocation of resources such as time, space and money. Despite the unprecedented status that memory studies have achieved within the humanities and social sciences, the economic nature of memory, especially traumatic memory, has received little attention (Shauli & Schammah Gesser 2016–2019). We argue that collective memory, which consumes time, space, supplies and other material resources, not only produces political, social, cultural and symbolic benefits, but also economic ones. This implies managing its production, maintenance, dissemination, commodification and consumption. Elaborating on this perspective, the article offers an economic reading of the Valley of the Fallen.

Keywords: economy of memory, Valley of the Fallen, fascist topography, heritage, investment, profiting

Más allá del auge de la memoria

Cuatro décadas después de la publicación del monumental proyecto de Pierre Nora, *Lieux de mémoire*, el campo de los estudios de la memoria ha alcanzado un estatus sin precedentes dentro de las humanidades y las ciencias sociales (Winter 2000; Confinio 2002; Kansteiner 2002; Suleiman 2006; Corning & Schuman 2015). Una primera ola de estudios se centró en el Estado-nación como marco de análisis. Los temas abarcaron desde «la búsqueda de un *modus vivendi* tolerable frente a un pasado traumático» hasta la representación de este pasado en las prácticas museísticas, en los monumentos, en las artes y en las narrativas (Forbes et al. 2009; Sorensen & Viejo-Rose 2015). No menos estudiada ha sido la manera en que las memorias históricas han condicionado las relaciones sociales, redefiniendo las políticas nacionales y los espacios públicos (Sevcenko 2011, 114–123; Sion 2008). Otra gran vertiente de análisis se ha enfocado en el potencial que tienen los lugares de memoria traumá-

tica para fomentar memorias multidireccionales y agonísticas, aunque también antagónicas.¹

No obstante, la masa crítica de los estudios de memoria ha pasado por alto el carácter económico de la memoria traumática y, aún hoy, contamos con pocos trabajos sistemáticos que analicen el raciocinio económico detrás de las manifestaciones concretas de la memoria colectiva (Finkelstein 2000; Bilbija & Payne 2011). Sabemos que no hay una memoria individual sin una memoria grupal que reitere y refuerce nuestros recuerdos, como ya lo estableció Maurice Halbwachs en 1925. La reminiscencia individual depende de la existencia de la memoria colectiva para la retención, la comparación y la verificación de los recuerdos personales. Más aún, la decisión racional de los individuos, como agentes de la memoria, de realizar una inversión y un esfuerzo mental y emocional los convierte en un eslabón indispensable de lo que se puede designar un «abordaje económico de la memoria». Dicho de otro modo, si recordar un hecho traumático es doloroso, el individuo, como agente racional, recuerda un pasado traumático cuando puede esperar algo a cambio. Esta recompensa puede consistir en bienes sociales intangibles como la empatía, el reconocimiento y la aceptación, la legitimidad y el encontrar un propósito en la vida, o bienes tangibles como reparaciones y subvenciones. Partiendo de esta premisa, argumentamos que la inversión en la producción de memoria y en las políticas públicas dependen tanto de la voluntad de los individuos como de la disposición de actores colectivos, sean estas organizaciones comunales, ONG, instituciones dentro y fuera del Estado-nación, como podrían ser las comunidades diaspóricas de memoria, u otros organismos supra- o transnacionales (Shauli & Schammah Gesser 2016–2019). Es este también el caso de los gobiernos y de sus administraciones a nivel local, municipal, regional y nacional, que dan recursos de diversos tipos, así

1 La memoria multidireccional, concepto acuñado por Rothberg, rechaza las relaciones jerárquicas y competitivas que afirman que los recuerdos de un grupo, de una cultura o de una nación tienen más peso o significado que los de otro, y establece que están siempre sujetos a negociación y a referencias cruzadas. La memoria agonista va más allá, en tanto que explora las condiciones que fomentaron la violencia y busca la participación de todos los grupos para forjar un nuevo discurso. En contraposición, las memorias antagónicas tienden a ser exclusivistas y verticales, asumiendo que las víctimas son solo del grupo al cual se pertenece (Rothberg 2009; Berger et al. 2017).

como el de una gran variedad de empresas, inversores y actores privados que encuentran en las políticas públicas de la memoria un canal idóneo para proyectar y hacer negocios.

A su vez, la presencia de la memoria colectiva traumática en el espacio público implica, al menos, tres variables. La primera se centra en una visión del tiempo y de sus ciclos: las celebraciones, los calendarios y los días conmemorativos. Una segunda variable es el lenguaje. Pensemos en aquellos conceptos que permiten nombrar y dilucidar el trauma: «memorias agónicas», «genocidio», «antropología forense», «topografía del terror». Lo mismo podemos decir de los conceptos de orden terapéutico, tanto colectivos como individuales, y que van desde la «justicia transicional» hasta la ya clásica terminología en referencia al trauma, la pérdida y la ausencia, como *acting out* y *working through* (LaCapra 1999). Una tercera variable nos remite a los lugares de memoria. Estos pueden ser centros de detención, tortura y exterminio, como la ESMA en la ciudad de Buenos Aires; cárceles, como la de Carabanchel en los alrededores de Madrid (Ortiz 2013); campos de batalla y ruinas, como las de Belchite (Michonneau 2017), o predios monumentales y mausoleos, como es el caso del Valle de los Caídos en Cuelgamuros.

En tanto que la producción de la memoria depende de la asignación de recursos a las variables de tiempo, de lenguaje y de espacio, no solo proporciona reparaciones y beneficios políticos, sociales, culturales y simbólicos. La memoria colectiva traumática también implica la gestión de su producción, de su difusión, de su consumo y de su mantenimiento. Como tal, las manifestaciones públicas de memoria traumática deben también ser analizadas dentro de un marco económico, donde la inversión de recursos conlleva la expectativa de rendimientos. A su vez, mapear, cuantificar y sistematizar las manifestaciones y la mercantilización de la memoria traumática permite entender cómo el mercado de la memoria es sensible no solo a los desmanes de conflictos sociopolíticos, ideológicos o generacionales, sino también a los auges y procesos de crisis y de desaceleración económicas. Para analizar la economía de la memoria que se establece en sitios tan paradigmáticos como la cárcel de Carabanchel, las ruinas de Belchite o el Valle de los Caídos en Cuelgamuros es necesario considerar una serie de variables. Son, entre otras, las siguientes: a) la

ubicación y las características tipo del sitio y de su demarcación; *b*) las fechas y los motivos de construcción, de inauguración, de clausura, de reinauguración o de demolición; *c*) la labor de arquitectos, así como la contratación de constructores, de servicios de proveedores de insumos y de mano de obra; *d*) la historia de la propiedad, su estatus legal y las formas de su administración; *e*) la evolución del debate en torno al lugar y los procesos de mitificación que lo han acompañado; *f*) los usos públicos iniciales y potenciales del espacio y de sus instalaciones; *g*) la historia del valor del mercado inmobiliario del sitio y el seguimiento tanto de las inversiones como de la trayectoria de los inversores involucrados; *h*) la distancia entre el lugar y los asentamientos rurales, los complejos urbanos o las ciudades en expansión; *i*) el perfil socioeconómico de los habitantes en las áreas aledañas, y *j*) la presencia o la falta de actividades rentables en el sitio y en sus alrededores —p. ej., transporte público, visitas guiadas, tarifas de admisión, hotelería, alquiler de salas de convención, espacios de exhibición, cafeterías y demás.

Dado que el valor monetario de la memoria es un concepto complejo que solo se puede cuantificar de manera indirecta, las variables enumeradas anteriormente ofrecen una estimación relativa del valor económico alternativo de los lugares de memoria traumática. El análisis de los mecanismos de oferta y demanda de los productos básicos de memoria mediante una mayor especificación de las variables —como el valor inmobiliario de los espacios y sitios de memoria antiguos o emergentes, la inversión en industrias de recuperación de la memoria que mezclan la información con el entretenimiento, los ingresos de estas empresas y el aumento del turismo de patrimonio incómodo asociado al dolor, a la muerte y a los conflictos— permiten dilucidar los cambios en el valor de la propiedad de la tierra, los impuestos y la planificación en torno a lugares de memoria traumática tan diversos como son el Valle de los Caídos, las ruinas de Belchite o la ya demolida cárcel de Carabanchel.

Partiendo del abordaje económico de la memoria traumática aquí esbozado, en los siguientes apartados se analizará el proyecto del Valle de los Caídos como paradigma de exaltación arquitectónica en la nueva topografía fascista que implantaría el nuevo régimen franquista una vez finalizada la contienda fratricida. En segundo lugar, se abordarán los en-

tramados que aglutinaron el lucro empresarial y el trabajo forzado, piezas claves que ponen de relieve las similitudes entre el fascismo hispano, el nacionalsocialismo alemán y el fascismo italiano. En tercer lugar, se examinarán los cambios en la propiedad y la administración, y el posterior usufructo de los predios que constituyen el complejo del Valle de los Caídos. Todo ello permitirá abordar la tensión entre los distintos actores involucrados —organismos estatales como Patrimonio Nacional; entidades religiosas como la abadía benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos; partidos políticos; particulares, y asociaciones provenientes de la sociedad civil—, así como el rol que, a lo largo de los años, han tenido los distintos jerarcas eclesiásticos y priores de la abadía.

1 Voluntad-de-arquitectura y topografía fascista: entre la exaltación y el colaboracionismo

El fascismo está saturado de espacio. Como sostiene muy acertadamente Nil Santiáñez, sus rasgos constitutivos se cristalizan en sus megarepresentaciones y prácticas espaciales (Santiáñez 2007). La importancia otorgada al espacio por los jerarcas e ideólogos fascistas halló su máxima expresión en la voluntad-de-arquitectura. Ello se plasmó en una serie de discursos, de representaciones y de prácticas casi obsesivas en torno a las edificaciones monumentales, cuyo objetivo sería simbolizar e imponer un universo estático y atemporal que reflejase la grandeza nacional y el poder absoluto (Santiáñez 2013). En España fue la pluma de Ernesto Giménez Caballero la que popularizó en *Arte y Estado* la representación fascista del espacio ibérico (2009). La recreación de una topografía fascista del paisaje tanto urbano como rural, que Giménez Caballero ensalzó siguiendo los pasos de Joseph Goebbels —ministro de Propaganda de Hitler— y que se convirtió en el primer manifiesto de estética fascista en España, tendrá en Cuelgamuros, el valle que separa Madrid de Segovia, a sesenta kilómetros de la capital y ubicado en la región montañosa de Guadarrama, una cita obligada. Su objetivo sería la construcción de un monumento para inmortalizar los caídos del bando nacional muertos en combate.

Sabemos que hacia el final de la guerra fueron muchas las localidades españolas que comenzaron a erigir pequeños monumentos y cruces ho-

menajeando a los *héroes y mártires* de la contienda civil. Los nombres de los caídos en cada localidad estaban siempre encabezados por el de José Antonio Primo de Rivera y no pocos ayuntamientos planearon realizarles un gran monumento. Tal fue el caso de la ciudad de Burgos, convertida en sede de la Junta de Defensa Nacional al inicio de la guerra, que compitió con la capital isleña de Las Palmas de Gran Canaria, de donde Franco, por entonces a cargo de la Comandancia General de Canarias, había partido el 18 de julio de 1936 hacia Marruecos, dando así inicio a la sublevación que conduciría a la Guerra Civil (Castro 2008).

No obstante, en agosto de 1939, el Gobierno central decretó la suspensión de cualquier iniciativa. La Inspección General de Suscripciones ordenó a todos los ayuntamientos que hubiesen obtenido fondos para tales proyectos, como fue el caso de Burgos, que había recaudado 231.175 pesetas, transferirlos al Estado. El motivo era claro: Franco se había reservado para sí el liderazgo de tal emprendimiento. El primer abad del monasterio de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, el benedictino fray Justo Pérez de Urbel, historiador y prolífico periodista de ideología falangista y totalitaria, como lo demuestran sus ensayos en la prensa afín a este ideario (Pérez de Urbel 1938) se aseguró de difundir en varias ocasiones el haber escuchado en boca del propio general Franco el relato de cómo encontró el paraje de Cuelgamuros y el porqué de su elección.² Pero más allá de los mitos y las narrativas que se difundieron en torno a la ubicación del mausoleo, el Valle de los Caídos fue, desde sus inicios, una elección de transcenden-

2 Pérez de Urbel transcribe la narración de Franco en su guía del Valle de los Caídos (1959, 4) de la siguiente manera: «Un día, ya en los comienzos de 1940, le dije a Moscardó: “¿Quieres que vayamos a buscar el Valle de los Caídos?”. Porque el Valle debía existir y seguramente por esta zona. Llegamos hasta el Alto del León, descendimos hasta Guadarrama, tomamos la carretera que lleva a El Escorial y a los dos o tres kilómetros nos detuvimos para examinar una hondonada que se abría en dirección a la sierra. [...] Seguimos hasta llegar a un cerro pedregoso. El guarda que nos acompañaba nos dijo que se trataba del cerro del Altar Mayor, nombre que nos impresionó. Trepé hasta la cima, no sin cierta dificultad. El paisaje me agradó sobremanera. “Sube”, grité a Moscardó, que sudaba y jadeaba cuesta arriba. Algo más al norte pude observar otra cima más alta todavía, un haz de riscos calvos de color dorado, entre cuyas grietas asomaba el verdor de algunos árboles raquíticos. “Es el cerro de La Nava”, dijo el guarda. El nombre es menos sugestivo que el de la altura en que estamos, pero su forma me parece más majestuosa. “No nos harás subir también hasta allí”, dijo el héroe del Alcázar de Toledo. “No es necesario por ahora, pero subiremos algún día y me atrevo a esperar que subirán muchos españoles”».

cia política, ideológica y propagandística sin igual. Las extraordinarias características geográficas buscadas para dar el marco adecuado al mausoleo solo confirmaron el peso de su importancia (Méndez 1959, 1982).

El paraje natural conocido como el risco de la Nava, situado en la sierra de Guadarrama, a una altitud de entre los 985 y los 1.758 metros, que se alcanzan en lo alto del monte Abantos y a una cota de altura de unos 1.398 metros, fue el sitio elegido para erigir la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. El monumento, cercano al monasterio de San Lorenzo de El Escorial, y a 58 kilómetros de la capital, que finalmente ocuparía 1.365 hectáreas, se situaba en el cruce de rutas que comunican el monte Abantos, uno de los más importantes de la sierra de Guadarrama, con las ciudades de Toledo, de Ávila, de Segovia y de Madrid. No cabía duda de que, con el paso del tiempo, el Valle de los Caídos se convertiría en un exponente único dentro de la nueva topografía fascista, transformándose, varias décadas después, en un eslabón central dentro del circuito español de turismo cultural.³

Al aproximarse la fecha de su inauguración, el régimen franquista intentó maquillar el objetivo inicial del mausoleo: perpetuar únicamente la memoria de los caídos en la guerra del bando nacional. Así lo expresó la circular del Ministerio de Gobernación en 1958, que dictaminó que el objetivo del monumento era «dar sepultura a quienes cayeron en la Cruzada, sin distinción del campo en el que combatieron». La medida implicaba que soldados de ambos bandos de la Guerra Civil, muertos de 1936 a 1939, fuesen enterrados en su basílica (*La Vanguardia Española*, 30 mayo 1958). Sea como fuese, la brecha entre la fecha de inicio de la construcción, el 1 de abril de 1940, y la inauguración final, el 1 de abril de 1959, que simbolizaban el Día de la Victoria, no permitiría distorsionar la verdadera vocación del Valle de los Caídos: eternizar la victoria de los nacionales contra la Segunda República. Se desvirtuaba, de esta manera, la supuesta reconciliación en que tanto insistían las altas jerarquías eclesiásticas del momento.

3 Desde el 1 de agosto de 1958, día de su apertura, hasta hoy lo han visitado más de cincuenta millones de personas, convirtiéndose, por tanto, en uno de los monumentos más visitados de España y parte del motor económico y cultural de la zona.

Junto al aval eclesiástico del que gozó durante dos décadas la construcción del Valle, fue clave el papel de los arquitectos, los escultores y los artistas al servicio de la exaltación del nuevo régimen. De hecho, la idea de realizar un monumento que eternizase a los caídos obsesionó a no pocos pensadores, creadores e intelectuales. Un caso pionero fue el de Luis Moya Blanco, arquitecto miembro de la Academia de Bellas Artes. Moya, junto al escultor Manuel Álvarez-Laviada y el militar Gonzalo Serrano y Fernández de Villavicencio, vizconde de Uzqueta, habían desarrollado diseños en el Madrid de los años 1936–1937 y dieron a conocer su diseño faraónico, titulado «Sueño arquitectónico para una exaltación nacional», en la revista falangista *Vértice* ya en 1940. Aun así, Moya, que había sido responsable de la construcción de la Universidad Laboral de Gijón, del Museo de América y de la reforma del Teatro Real en Madrid, no tuvo éxito en los concursos públicos, que no llegaron a acordar a un ganador (Moya 1940, 7–12 y 61). Fue finalmente el arquitecto Pedro Muguruza Ontañón —de familia oriunda de Elgoibar, conservador en lo político y clasicista en cuanto a su perfil artístico— quien tomó las riendas del proyecto de la construcción del Valle de los Caídos. Muguruza había regresado a España en abril de 1937, después de haber partido hacia Inglaterra al inicio de la guerra. Muguruza, que ya gozaba entonces de una muy importante reputación profesional,⁴ organizó en Burgos una asamblea de arquitectos nacionalistas presidida por el ministro falangista Raimundo Fernández Cuesta. El objetivo era discutir la creación de un Ministerio de Arquitectura y Urbanismo. De tal maniobra surgió la creación de la flamante Dirección General de Arquitectura, dependiente del Ministerio de Gobernación, en 1939. Muguruza, como su primer director, miembro de la Comisión de Estilo de las Conmemoraciones de la Patria y comisario general del Servicio de Patrimonio Artístico Nacional, dejó constancia de su postura ideológica en no pocos escritos y conferencias públicas, como la revista *Horizonte* en 1940 y los diarios *ABC* y *Arriba* en 1942. En el discurso pronunciado en

4 Muguruza contaba ya con una distinguida trayectoria, que incluía la construcción del Palacio de la Prensa, en la plaza del Callao de Madrid; la restauración de la casa de Lope de Vega y de las cartujas de El Paular y de Miraflores; la reconstrucción arqueológica de Sagunto; la reforma del Museo del Prado, del Palacio de Santa Cruz y de las Cortes, y una destacada labor en el monumento a Cervantes de la plaza de España, en Madrid.

el acto de clausura de la Exposición Nacional de Bellas Artes, realizada en Barcelona en 1942, el arquitecto exaltó las ideas arquitectónicas del Caudillo afirmando que «la arquitectura española estaba llamada a desarrollar un estilo imperial, el único acorde con el momento histórico de Cruzada liberadora que había vivido la nación». Su poder de retórica, sus capacidades profesionales, así como la incapacidad de otros candidatos de poder satisfacer las veleidades del dictador, convirtieron a Pedro Muguruza en el elegido de Franco para llevar a cabo los proyectos de construcción del monumento. Al cabo de un año, el 1 de abril de 1941, comenzaron las obras. La lentitud y las dificultades a la hora de iniciar la extracción y la acumulación de toneladas de roca obligaron a Franco a crear por decreto el 31 de julio de 1941 un Consejo de Obras del Monumento a los Caídos. El consejo, compuesto por ocho personas, fue encabezado por el propio Muguruza; por el marqués de Lozoya, entonces director general de Bellas Artes, y por el comisario general de Abastecimientos y Transportes para controlar los ritmos de trabajo y el avance de la obra.

A los diez años del inicio de la construcción, Muguruza, que ya había iniciado la preparación de la infraestructura del Valle de los Caídos, las excavaciones de la cripta y la construcción del monasterio tras el risco de la Nava, se vio en la necesidad de buscar un sustituto para continuar la dirección de las obras debido a su deteriorado estado de salud. Se convocó un concurso en que participaron miembros de la Junta de Dirección de las Obras del Valle, saliendo ganador su discípulo, el arquitecto Diego Méndez. Este modificó la obra iniciada por Muguruza, muy especialmente la cruz, la cripta, el monasterio y la explanada, duplicando las dimensiones iniciales programadas para lograr el aspecto colosal que tanto deseaba Franco, siendo el responsable de la conclusión del proyecto en su totalidad.

Tanto Muguruza como Diego Méndez recibieron altas remuneraciones, que se correspondieron con la total adhesión de ambos al Caudillo y a su proyecto político-ideológico. Sin embargo, la invitación a participar en la construcción del mausoleo al escultor Juan de Ávalos, que se encontraba exiliado en Portugal desde 1942, resultó singular. En su caso, fue básicamente el peso de la remuneración económica y el capital social y simbólico que le proporcionaría ser el escultor principal del proyecto del Valle de los Caídos, y que le abriría nuevas posibilidades de trabajo tanto en Es-

paña como en el extranjero, los que determinaron su participación.⁵ Vale la pena recordar que Juan de Ávalos cobró del Consejo de las Obras del Monumento Nacional a los Caídos 13.740.752,25 pesetas en efectivo, que, unidas al importe del transporte y al valor del estudio-taller, se acercaban a los 17 millones de pesetas.

Junto a la disponibilidad de arquitectos, de escultores y de artistas, debemos considerar la disponibilidad, más crucial aún, de capitales y de inversores, de empresas constructoras y de proveedores de insumos. Rastrear y analizar esta disponibilidad es fundamental, ya que la memoria colectiva traumática, que implica la gestión de su producción, se traduce en la realización de transacciones, en convenios y en inversión de recursos que conllevan la expectativa de rendimientos. Dado que el Valle de los Caídos costó a las arcas públicas durante sus veinte años de construcción 2.421 millones de pesetas de la época, es fundamental, por tanto, esclarecer las rutas de dinero y de capital que hicieron posible el inicio de las obras del mausoleo.⁶ Estas iban a responder a iniciativas muy variadas. Una de ellas la podemos rastrear en el decreto de 1940 que disponía que la financiación de la compra del lugar y de la construcción del monumento fuesen financiadas a través de una suscripción nacional. Ya en la primera página del número 14 del *Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España*, fechado en Burgos el 30 de agosto de 1936, el concepto de suscripción nacional se había definido como «la cooperación entusiasta otorgada a la Junta de Defensa Nacional por parte de los buenos patriotas», es decir, el «Ejército, las milicias voluntarias, las corporaciones, la industria y el comercio, los funcionarios públicos y la población civil en masa». A esta suscripción nacional se uniría una contribución única por parte de los funcionarios del Estado, de los militares, de los civiles en activo y de las

5 En palabras de Ávalos, recogidas por Daniel Sueiro, este se define liberal y profundamente cristiano, a la vez que confirma haber tenido con el Caudillo relaciones puramente circunstanciales, aun cuando sabía que Franco estaba muy satisfecho con su obra. Muy agradecido por las nuevas oportunidades y por el respeto que despertó en mucha gente por su labor como escultor en el Valle de los Caídos, Ávalos enfatiza hasta qué punto sus esculturas exhibidas en el Valle le abrieron puertas en Estados Unidos, en Europa y en Rusia, pero sobre todo en América (Sueiro 1976, 79).

6 Para entender la magnitud de la obra conviene comparar su coste con otras partidas de los presupuestos. Así, hasta 1970 el Estado había dedicado 2.339 millones de pesetas a educación, explica Mariano Sánchez, autor de obras como *Los Franco, S. A.* o *Los banqueros de Franco*.

clases pasivas, de los funcionarios de la Administración local y de los dependientes de bancos oficiales y de empresas que administrasen monopolios del Estado o que se encargasen de la realización de servicios públicos. El decreto estipulaba, a su vez, el nombramiento de la comisión que administraría la construcción del monumento.⁷

En cuanto a la construcción del Valle propiamente dicha, es fundamental en el ámbito de este estudio prestar atención a las entidades privadas contratadas por el Gobierno franquista para tal propósito, ya que conforman una pieza clave en la inversión, en la producción y en la explotación de las políticas públicas de la memoria traumática.

2 Vasos comunicantes: el lucro empresarial y los trabajos forzados

La guerra de la posguerra, iniciada en abril de 1939, se caracterizó por la total y perseverante exclusión de los vencidos. La represión, como continuación del mecanismo militar y como control sociopolítico de primer orden, legitimó la implantación de un sistema de explotación económica que perduró hasta bien entrada la década de los cincuenta.

La reconstrucción diferencial y sesgada de la España de la posguerra impuesta por Franco se basó en una economía autárquica, de autoabastecimiento y de supuesta autoeficiencia. Este dirigismo económico nacionalista ha sido cuidadosamente estudiado, entre otros, por el historiador británico Michael Richards, que hace hincapié en esta doble estrategia que es, al mismo tiempo, un mecanismo de represión y de reconstrucción dirigida desde el poder (Richards 2001). Siguiendo el análisis de Richards, argumentamos que, si la economía actuó como foco central de las políticas de represión ante todo aquello que representó la Segunda República, dicha estrategia se transformó a su vez en botín y recompensa, beneficiando principalmente a los grupos económicos que apoyaron la rebelión

7 El decreto fue firmado por Francisco Franco el 1 de abril de 1940, primer aniversario del fin de la guerra, en el Palacio de El Pardo, recién restaurado por el que sería el segundo arquitecto del Valle de los Caídos, Diego Méndez González. Esa misma tarde, tras haber presidido el primer Desfile de la Victoria en el paseo de la Castellana y el almuerzo de gala en el Palacio de Oriente junto a los embajadores de Alemania e Italia, Franco se trasladó a Cuelgamuros para asistir a la simbólica inauguración de las obras, como informó el diario *ABC*.

primero y el franquismo después, como bien lo recoge el parte del debate historiográfico (Sánchez & Tascón 2003; Torres 2003a, 2003b; Pires 2006).

El cambio de guardia empresarial, bancaria, financiera y comercial que se produjo en 1939 facilitaría y convertiría en totalmente legítima la obtención de beneficios por parte de la oligarquía y de la alta burguesía, cómplices del régimen. De hecho, el debate historiográfico sobre la relación del empresariado con el franquismo ha sido muy intenso (Cabrera & Rey 2002; Sánchez & Tascón 2003; Toboso Sánchez 2007). Si bien hay posturas que sostienen que el régimen de Franco fue hostil a la empresa privada porque empeoró sus expectativas, dificultó su modernización y la obligó a competir con las empresas públicas, investigadores como Toboso Sánchez argumentan que la arbitrariedad que caracterizó al régimen hizo que la política económica que rigió a las empresas no se basase en la racionalidad económica, sino en decisiones discrecionales que se subordinaron a los intereses y a la supervivencia de la dictadura. El trato individualizado a los empresarios fomentó la conformación de lo que Glicerio Sánchez definió como las redes sociales de intereses del primer franquismo (Sánchez 2003). Todo ello ayudó al surgimiento de un grupo empresarial significativo que recurrió a medios extraoficiales y a mecanismos informales para promover sus negocios. Los estudios prosopográficos han realzado hasta qué punto contactos, amigos o parientes; nepotismo, arbitrariedad o simplemente corrupción, junto al mantenimiento de estrechos lazos con las autoridades, fueron cruciales para sellar el éxito de los negocios de un empresariado que, en no pocos casos, era de menor envergadura pero que crecería de forma exponencial después de 1939.

Tal es el caso de las empresas constructoras que se lucraron y enriquecieron a través de las licitaciones que otorgaba el Estado y con la consecuente acumulación de riquezas. Casos paradigmáticos fueron los de aquellas empresas que participaron en la construcción del Valle de los Caídos, entre las cuales figuran las constructoras San Román, Estudios y Construcciones Molan y Banús, a las que siguieron los proveedores de servicios e insumos como Marmolería Bilbaína y Huarte y Compañía, todas ellas entidades con las que Franco mantuvo un intercambio asiduo y una red de intereses y de mutua complicidad. Este tipo de estructuración facilitó en las décadas de los años cuarenta y cincuenta la profundización

del modelo dirigista y autárquico del régimen, y el enriquecimiento, capitalización y expansión de las entidades involucradas.⁸

La división del trabajo fue la siguiente: la empresa San Román, fundada en 1927 por Alejandro San Román y José María Aguirre Gonzalo bajo el nombre de San Román y Aguirre Ingenieros, se encargó de la perforación en la roca del cerro de la Nava. La Unión Española de Explosivos (Madrid) y Patricio Gamella (Alpedrete) suministraron los explosivos. Estas suministradoras recibieron un primer pago de 335.000 pesetas de su presupuesto inicial, que les fue otorgado por el Consejo de Obras del Monumento a los Caídos, creado por decreto el 31 de julio de 1941. Ese monto contrasta con las irrisorias 1.301 pesetas que en el mes de junio de ese mismo año se había pagado en concepto de salarios a los trabajadores que realizaban las obras en el Valle (Olmeda 2009, 40–44).

San Román empezó trabajando con 25 empleados, ampliándose este número, de forma progresiva, hasta llegar a 250. La empresa pagaba los traslados semanales de los trabajadores a Madrid, así como la compra de materiales a otras empresas, incluyendo suministros de primeros auxilios y demás. No obstante, los presupuestos de las empresas implicadas en la construcción del Valle se vieron severamente afectados por las dificultades propias de trabajar en un área rural sin acceso a servicios básicos. Dados los constantes problemas de abastecimiento eléctrico, San Román se vio obligada a comprar compresores para trabajar durante el verano y mantener un pequeño poblado con servicios básicos como cocina, enfermería y capilla, que se convirtieron en el «centro de vida de Cuelgamuros» (Olmeda 2009, 81). Esto permitió a algunas de las familias de los presos que fuesen trasladadas a vivir en el Valle.

8 El intervencionismo implicaba, entre otras medidas, la fabricación de productos básicos, fijando los precios e imponiendo el racionamiento de alimentos. El 14 de mayo de 1939, se implantó la cartilla de racionamiento, que se presentaba como una medida temporal, pero que se mantuvo vigente durante trece años. En el preámbulo del decreto que estableció esta medida excepcional, el Gobierno de Franco apeló a «la necesidad de asegurar el normal abastecimiento de la población y de impedir que prospere el acaparamiento de mercancías». Las consecuencias del racionamiento fueron exactamente las contrarias: produjo un abastecimiento anormal y fomentó de tal manera el acaparamiento que se generó un inmenso mercado negro. En este comercio ilegal, los precios de productos básicos para la alimentación como el trigo, la harina, el pan y el aceite duplicaron y hasta triplicaron las cifras establecidas por el Gobierno para el mercado oficial (Moradiellos 2000).

La empresa Estudios y Construcciones Molan fue la encargada de la construcción del monasterio. Esta empresa recibió en un segundo pago del Consejo de Obras del Monumento a los Caídos la suma de 154.261 pesetas, que se destinó a la construcción de barracones (Olmeda 2009, 43). Molan, como otras empresas implicadas en la construcción del Valle, utilizó la mano de obra de 140 presos, además de personal especializado para que hiciera los trabajos que no sabían hacer los primeros, como fue el caso de la construcción de canteros (Olmeda 2009, 97).

La empresa Banús, liderada por los hermanos Juan y José Banús, se encargó de realizar la carretera de unión con el risco de la Nava. Este era uno de los trabajos más duros, puesto que para picar la piedra se trabajó con muy escasa tecnología. La gestión de Banús tuvo que hacer frente a no pocas dificultades, dada la incompetencia de la empresa. Entre ellas estaba el no contar con mano de obra suficiente para realizar tal brutal tarea, la ausencia de medios para que los presos del destacamento pudiesen subir al monumento, la falta de alimentos y la escasez de carburantes para realizar las tareas básicas. Aludiendo a que la obra tenía un déficit del 40 %, dada «la incapacidad de aprovechar materiales y la falta de especialización de los presos», la empresa Banús pidió compensaciones, lo que le permitió obtener un aumento del 30,09 % sobre los precios fijados en el contrato inicial (Olmeda 2009, 90–92).⁹

La empresa Huarte y Compañía inició su intervención en la construcción del Valle de los Caídos en el año 1952 tras ganar por concurso la acometida de la explanada delantera, beneficiándose así de la rescisión del contrato anteriormente contraído con la empresa Francisco Casas Sagarra, que perdió la adjudicación de la ampliación de la cripta (Olmeda 2009, 147). La intervención de Huarte en las obras de la cripta comenzó el 24 de octubre de 1953, avanzando a gran velocidad en comparación con los constructores anteriores.

La titularidad de las empresas que participaron en la construcción y sus historias previas permite rastrear a aquellos empresarios menores que crecieron cuando terminó la contienda del 1939, llegando a la pleni-

9 En varias ocasiones José Banús fue acusado de «acaparamiento y subida abusiva de precios» (Olmeda 2009, 39, 56, 74, 88).

tud de su trayectoria en las décadas posteriores. Los casos más paradigmáticos son las empresas de los hermanos Banús y la constructora de Félix Huarte Goñi.

Tras la construcción de la carretera que daba acceso al Valle de los Caídos, los hermanos Banús se mantuvieron bajo el amparo del régimen. En el caso de José, estableció relaciones tan estrechas con El Pardo que fue conocido como «el constructor del régimen». José Banús se convirtió en uno de los primeros promotores de los nuevos núcleos poblacionales que iban a rodear Madrid. Banús edificaría, en un tiempo récord y a costa de una edificación deficitaria en términos de calidad —que no de ventas de inmuebles—, los barrios obreros de la Concepción, El Pilar, Simancas, San José de Valderas y Villamil, que darían acogida a las masas de emigrantes llegados a la capital. Si bien José también se ocupó de barrios de lujo de Madrid y de la costa malagueña, su proyecto más ambicioso se concretaría gracias a la autorización concedida por Franco para realizar un puerto deportivo, al que puso su nombre (Gutiérrez Molina 2017). Puerto Banús, que se inauguró en 1970 con el fin de transformarse en una atracción turística de lujo de alcance internacional, se concibió a partir de una arquitectura de ensalzamiento de la estética neopopular andaluza, cuya artificialidad sería luego producto de consumo del turismo más masivo. Sea como fuese, la estrecha relación de José Banús con el régimen, que tanto marcó sus negocios, le hizo merecedor de numerosas distinciones, como la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, la Gran Cruz del Mérito Civil y la Gran Cruz al Mérito Turístico (Herrera Gil 2013).

En el caso de la empresa Huarte y Compañía, oriunda de Navarra y dedicada a la construcción, fue creada por Félix Huarte Goñi en 1927 en Pamplona. Tras las primeras obras allí, Huarte se trasladó a Madrid, donde la empresa participó en la construcción de la Dirección de Sanidad en la plaza de España en 1929. Durante la Segunda República, realizó la construcción de la Facultad de Filosofía y Letras y los Nuevos Ministerios. No obstante, es tras la Guerra Civil cuando Félix Huarte consolidó su presencia en el ámbito empresarial. En los años cincuenta impulsó un grupo de empresas que incluyó a Industrias Metálicas de Navarra (Imenasa), creada en 1953, que fabricaba grúas y carpintería de aluminio con licencias de la compañía alemana Liebherr. Hacia 1959 Imenasa ya era proveedora

de las principales fábricas españolas, suministrando embragues y direcciones a la Empresa Nacional de Autocamiones y frenos a la importante empresa automotora Nueva Montaña Quijano. A su vez, nuevas empresas se añadieron a la red familiar, como Tornillería Fina de Navarra (Torfina-sa), fundada en febrero de 1955; Material Auxiliar de Petróleos (Mapsa), que apareció en octubre de 1956, y Fabricantes Auxiliares del Automóvil (Fadesa), creada en abril de 1962, que fue, posteriormente, proveedora de AUTHI, la empresa española de Automóviles de Turismo Hispano-Ingleses que estuvo activa en la última década del régimen.

Cabe recalcar que, además de su capacidad para hacerse con los concursos de obras públicas de las instituciones del Estado (desde universidades y ministerios hasta hospitales, carreteras y monumentos como el Valle de los Caídos), lo que favoreció su vertiginosa acumulación de capital, Huarte participó activamente en varios consejos de sociedades de ámbito nacional. En 1964 fue elegido diputado por la Merindad de Pamplona, y ocupó el puesto de vicepresidente; fue procurador en Cortes en representación de la Diputación de Navarra entre 1964 y 1971, y desempeñó, entre otros puestos, el cargo de presidente de la Caja de Ahorros de Navarra, el de vocal del Consejo Técnico Asesor del Patronato Alonso de Herrera del CSIC y el de consejero de la Unión Eléctrica Madrileña. También fue miembro del Consejo de Patronos para los centros de estudios civiles de la Universidad de Navarra. Sus contactos políticos y su acceso a información sobre los ciclos económicos le permitieron consolidar la red de fábricas adheridas al Grupo Huarte, conformada por una veintena de sociedades mercantiles e industriales que perdurarían hasta finales de los años noventa (Eusko Ikaskuntza, s. f.; Torrús 2012). De esta manera, el Grupo Huarte se convertiría en una de las grandes fortunas del empresariado español en la segunda mitad del siglo xx.

El periodismo de investigación ha rastreado el entramado empresarial, financiero, político e institucional que arropó al régimen, y cómo dichas empresas se beneficiaron del trabajo forzado (Maestre 2019; Pascual 2019). De hecho, en la construcción del Valle, que en sus comienzos llevaban a cabo trabajadores especializados contratados, se incorporó desde el año 1942 el trabajo forzoso de prisioneros de guerra y prisioneros regulares, convirtiéndose, así, en uno de los casos más paradigmáticos de la explo-

tación de trabajo esclavo en la posguerra. A su vez, una nueva serie de trabajos académicos constata la manera en que la represión y la implacable exclusión de los vencidos legitimaron un mecanismo militar y de control sociopolítico de primer orden, a la vez que generaron un sistema de explotación económica que se mantuvo más allá de la contienda. El uso del trabajo forzado como elemento represivo constituyó una forma más de hacer política y de cimentar un régimen represivo y excluyente, convirtiendo el usufructo del trabajo forzado en una de las más claras similitudes entre el franquismo, el nazismo y el fascismo italiano. El conjunto de unidades creadas para someter a prisioneros republicanos y presos en trabajos esclavistas llevaron varios nombres: Batallones de Trabajadores, Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores, Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores Penados, Regiones Devastadas, Destacamentos Penales y Colonias Penitenciarias. Trágicamente famosos serían los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores Penados, como el Batallón núm. 95, existentes hasta 1948 (Beaumont Esandi & Mendiola Gonzalo 2004, 40).

Todas estas unidades paramilitares conllevaron un importante beneficio económico válido en sí mismo, que iba más allá de la supuesta reeducación, necesaria para el apuntalamiento ideológico en la posguerra (Mendiola Gonzalo 2013). El trabajo forzado, basado en la explotación de los prisioneros y presos republicanos, estableció un mercado de oferta de mano de obra del que unos fueron gestores y proveedores, y otros, arrendatarios. Entre los agentes del mercado estaba el propio Ejército rebelde, el naciente Estado y sus acólitos, una larga lista de instituciones provinciales y locales, así como la Iglesia católica y un sinfín de empresas privadas, industriales y terratenientes. Entre los administradores de esa mano de obra se encontraba la Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros (ICCP), órgano que ocupó un puesto primordial en la supervisión de los Batallones de Trabajadores Especialistas, los grupos que trabajaban en industrias militarizadas y los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores. Pero la ICCP no fue la única entidad que participó en este lucrativo servicio; también lo hacían las grandes unidades militares, el Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas y la Dirección Nacional de Regiones Devastadas. Esta última, que inició su labor a inicios

de 1938 y dependió primero del Ministerio del Interior y posteriormente del Ministerio de la Gobernación, dispuso de sus propios destacamentos de trabajadores, destinados a tareas de reconstrucción en diversos puntos de la geografía peninsular (Gómez Bravo 2008; González Cortés 2011).

El periodista Rafael Torres, autor de *Los esclavos de Franco*, cifró en 20.000 los presos republicanos que participaron en la construcción del Valle de los Caídos, con salarios muy por debajo del mercado y en condiciones de cuasi esclavitud.¹⁰ De hecho, las tres principales empresas, San Román, Molan y Banús, junto a la constructora Huarte y Compañía, dispusieron de mano de obra semiesclava para sus negocios privados por concesión del régimen de Franco.¹¹ De ellos, un número indeterminado murió por accidentes de trabajo, por hambre y por enfermedades.¹² Esta participación se sostuvo con el eufemismo de «la conmutación de sentencias por el trabajo realizado». El costo *de facto* por cada trabajador era de 0,50 pesetas diarias, aunque el salario real era de 13–14 pesetas.¹³ En muchos casos los prisioneros destinados al trabajo en el Valle eran seleccionados según sus capacidades físicas por las mismas empresas contratistas, como es el caso de Banús.¹⁴ Nicolás Sánchez-Albornoz, director del Instituto Cer-

10 No se sabe con exactitud cuántos presos participaron en la obra. Las cifras varían según la fuente que se consulte entre 2.000 y 20.000 (Olmeda 2009, 54).

11 Según sostiene Alejandro Torrés en su artículo, «Del Valle de los Caídos al Ibex 35», publicado en Publico.es en 18/11/2012, actualizado en 01/06/2017 y accesible en <https://www.publico.es/espana/del-valle-caidos-al-ibex.html>: «[...] En 1943 Agromán disponía de 250 presos republicanos trabajando en el monumento, 100 en las obras de El Escorial Aguas y del Arca de San Juan, y otros 140 en obras repartidas en cuarteles y monasterios. Banús, disponía de 125 presos trabajando en la carretera que da acceso al Valle de los Caídos, 90 presos construyendo la estación de trenes de Chamartín (Madrid) y de 50 más en la base militar de Torrejón.» Según recoge Olmeda en su investigación, en 1943 había 141 batallones de presos republicanos repartidos en diferentes obras a lo largo del territorio español.

12 El número de fallecidos es indeterminado porque no se tomaron en consideración en las cuentas oficiales los fallecimientos fuera del Valle como consecuencia de las lesiones producidas en él. Esta circunstancia se aplica tanto a los trabajadores libres como a los presos (Olmeda 2009, 75–78).

13 Aparecen casos de presos que consiguen trabajos ajenos a la construcción, lo que les supone sueldos más elevados. Es el caso, por ejemplo, de Alejandro Sánchez Cabezudo, que conmuta la pena trabajando como escribiente del Valle, con un sueldo mensual de 500 pesetas (Olmeda 2009, 63).

14 El periodista Isaías Lafuente (2002) cuantificó en su libro *Esclavos por la patria* los beneficios obtenidos por el franquismo a costa de utilizar presos políticos para la realización de obras: más de 130.000 millones de pesetas, unos 780 millones de euros. Ello se deduce del estudio de las memorias anuales remitidas a Franco por el Patronato para la Redención de Penas entre 1939 y 1970, conservadas aún en los archivos de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias (Sánchez 2003, 104).

vantes de 1991 a 1996 y miembro de la RAE, fue uno de los condenados a trabajos forzados por el régimen en 1947. Víctima del negocio realizado entre las empresas y el régimen de Franco en torno a la explotación de los presos trabajadores, Sánchez-Albornoz declaró haber estado «alquilado» a Huarte y a Banús por 10,50 pesetas al día en tanto que los reclusos, por su parte, percibían 50 céntimos (Calleja 2009).

3 Propiedad, administración y división de poderes: la discordia infinita

La historia de la propiedad, del estatus jurídico y de la administración del Valle de los Caídos han sido siempre un tema complejo, se podría decir que incluso premeditadamente pensado para crear confusión y agujeros negros. Inicialmente, la finca en el pinar de Cuelga Moros, posteriormente denominado de Cuelgamuros, había sido propiedad de don Gabriel Padierna de Villapadierna, marqués de Muñiz, y de sus herederos, los condes de Villapadierna. A partir de la ley decretada el 7 de octubre de 1937, el bando sublevado estableció la expropiación forzosa, lo que autorizó procedimientos rápidos de ocupación. La ley que facultaba a los gobernadores civiles a prestar auxilio a representantes de la Administración para efectuar dichas tareas de ocupación negaba, a su vez, el recurso de apelar a la Administración para modificar la cuantía de la indemnización que percibirían los afectados. En el caso de la finca de Cuelgamuros, la Administración abonó a los Villapadierna 653.483,76 pesetas por la expropiación (Sueiro 1976, 7). La información exacta acerca del estatus legal de la propiedad del Valle de los Caídos en los años que duró su construcción, desde 1940 hasta 1957, sigue siendo una incógnita a pesar de que al finalizar la Guerra Civil se promulgaron dos leyes el 15 de junio de 1939 y el 7 marzo de 1940 que crearon el organismo de Patrimonio Nacional, anteriormente llamado Patrimonio de la República. Este, a su vez, había reemplazado al Patrimonio de la Corona, vigente hasta 1931. La promulgación de las dos leyes franquistas incorporó los conventos y monasterios del patronato real segregados en 1932 durante la República, y eliminó cualquier referencia monárquica o republicana al nuevo Patrimonio Nacional. No obstante, no se han encontrado referencias exactas respecto al estatus de

la propiedad donde se construyó el complejo del Valle de los Caídos hasta mediados de 1957. Fue entonces cuando la situación jurídica del Valle se determinó a través de un decreto ley emitido por el régimen el 23 de agosto que atribuía la titularidad y la administración del lugar a la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, cuyo patronato y representación correspondían al jefe de Estado (Comisión de Expertos sobre el Futuro del Valle de los Caídos 2011). Entre los fines de la fundación como figura jurídica se incluía el «rogar por las almas de los muertos en la Cruzada Nacional y promover la paz entre los hombres sobre la base la justicia social cristiana». Sea como fuese, la situación jurídica se complicaría aún más a partir del convenio especial suscrito el 29 de mayo de 1958, por el cual la fundación pasaba a ser administrada por la abadía benedictina de Santo Domingo de Silos, después de que el papa Pío XII emitiera un decreto de erección de dicha abadía, fechado dos días antes, el 27 de mayo, a petición del Estado español (Comisión de Expertos sobre el Futuro del Valle de los Caídos 2011, 4). Asimismo, la fundación delegaba sus funciones a los religiosos, quienes deberían responder por el mantenimiento del culto con un mínimo de veinte monjes, con la promoción de una escolanía, con la dirección de un centro de estudios sociales y con el cuidado de una hospedería. Sea como fuese, estas jurisdicciones fueron objeto de disputa a finales del franquismo, especialmente, entre los años 1969 y 1973, a raíz de los desacuerdos entre Luis Carrero Blanco, por entonces vicepresidente de Gobierno, y el abad, Luis María Lojendio (Torres 2016). Las disputas se prolongaron hasta después del asesinato de Carrero Blanco, en 1974, y se mantuvieron una vez establecida la democracia.

El poder de la fundación sobre el Valle de los Caídos fue intervenido a partir de la nueva Ley de Patrimonio Nacional, decretada el 16 de junio de 1982, que lo redefinió como una entidad pública y secular que pasaría a administrar todos los patronatos reales, que, entre muchos otros predios, incluía «temporalmente» todos los activos del Valle de los Caídos.¹⁵ Si

15 Si bien la administración del Valle por Patrimonio Nacional sería «aparentemente provisional», según la disposición final tercera de la ley 23/1982, de 16 de junio, la orden benedictina recibía de la entidad una transferencia bancaria de unos 350.000 euros anuales para realizar tareas de conservación y mantenimiento, transacción que fue bloqueada en febrero de 2019 a la espera de que la orden presentara un presupuesto detallado de sus gastos e ingresos.

bien el reglamento de Patrimonio Nacional fue aprobado por real decreto en 1987, ni el gobierno socialista de Felipe González ni ninguno de los sucesivos gobiernos democráticos hasta la sanción de la Ley de memoria histórica de 2007, bajo la Administración de José Luis Rodríguez Zapatero, profundizó en el problema.

Fue el 27 mayo de 2011 cuando, por acuerdo del Consejo de Ministros, se creó el Comité de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos. A parte de analizar las posibles resignificaciones del Valle, se intentaron esclarecer las irregularidades referentes a la ordenación jurídica, a las funciones, a la administración, a los gastos y a las ganancias del mausoleo. Compuesto por expertos de un amplio espectro de disciplinas, el comité, no exento de críticas y polémicas en la esfera pública (González Cuevas 2016), propuso varias líneas de acción que permitiesen desacralizar y redefinir el futuro del mausoleo. Entre otras cuestiones polémicas, se abría el debate sobre la necesidad de exhumar los restos del dictador. El informe de la comisión de expertos, entregado al ministro de la Presidencia el 29 de noviembre de 2011, establecía, entre otras recomendaciones, una resignificación integral y una relectura completa del complejo, lo que implicaría la exhumación de los restos de Franco a un lugar que la familia designase, el cambio de la ubicación de la tumba de José Antonio Primo de Rivera, la inscripción del nombre de todas las víctimas allí enterradas, el derecho moral de las familias a la posibilidad de exhumar, identificar y dar sepultura a sus muertos y la negociación de un nuevo convenio con la Iglesia, entre otras reivindicaciones.

Con la llegada al poder del Partido Popular en 2012, bajo el liderazgo de Mariano Rajoy, con la profundización de la crisis económica iniciada en el 2008 y con las protestas sociales masivas que caracterizaron este período, se desdibujó la crispación en torno al futuro del Valle. El debate público fue desviándose hacia los temas más candentes, lo que permitió al PP suspender cualquier presupuesto que hubiese sido estipulado por la Administración socialista. A su vez, el constante desentendimiento del Gobierno popular, regido por el lema de «el olvido es lo mejor», dio lugar a una inercia que también se reflejó en el funcionamiento de Patrimonio Nacional, que no abordó el compromiso ni mucho menos la hoja de ruta requerida por el informe del comité de expertos.

3.1 ¿Patrimonio Nacional, un cajón de sastre?

A partir del año 2016, las premisas de clarificar el estatus y la administración del Valle, resignificar el mausoleo y exhumar los restos del dictador se transformaron en el mandato estrella de la oposición liderada por el PSOE, que había pedido un informe al Tribunal de Cuentas del Estado. La maniobra fue gestionada por Antonio Hurtado, diputado socialista en el Congreso. En sus consultas dejaría constancia del estado irregular de las cuentas relacionadas con los distintos predios que conformaban el complejo, de la falta de una jurisdicción clara, del déficit presupuestario y de la incompetencia para hacerse cargo de la administración del mausoleo. Según el testimonio de Hurtado, hasta el año 2016 no existía dentro de Patrimonio Nacional una contabilidad propia que estableciese los gastos del Valle de los Caídos. Hasta entonces, este órgano, que administraba un gran número de entidades que incluían todos los patronatos reales (p. ej., iglesias, conventos, monasterios, palacios reales), no contaba con una contabilidad diferenciada para cada uno de ellos. Al no tener sus cuentas claras, se hacía muy difícil saber qué era de un patronato real y qué era de otro. En palabras de Hurtado, todo ello terminaba convirtiendo a Patrimonio Nacional en una especie de «cajón de sastre con muchos flecos». Para Hurtado, el hecho de que la asignación que recibía esta entidad dentro de las rúbricas de presupuestos generales del Estado fuese bajo la entrada de «imprevistos» explicaba de por sí el desorden que acompañaba su contabilidad. No obstante, el Valle, al estar incluido dentro de los muchos y diversos patronatos que gestiona Patrimonio Nacional, no tiene una entidad propia. Por tanto, es este el órgano responsable de llevar el inventario de los bienes muebles e inmuebles y otorgar el presupuesto a la fundación/abadía que gestiona el Valle (Hurtado 2018).

Gracias a la presión ejercida por el PSOE y a los informes realizados por el Tribunal de Cuentas, quedó confirmado que la suma de los valores catastrales de todos los bienes muebles histórico-artísticos que reúne el Valle es de un total de 614, que asciende a 21 millones de euros. A su vez, se especificó que la subvención que Patrimonio Nacional otorgó a la abadía benedictina en los años 2014, 2015 y 2016 fue de 340.000 euros anuales. Los montos reconocidos por venta de entradas fueron de un promedio de 1.300.000 euros anuales, y el total de los gastos de explotación —gas-

tos de personal, gastos corrientes en bienes y servicios y transferencias e inversiones— fueron de 2.064.000, de 2.546.190 y de 1.836.350 euros, respectivamente.

Según Hurtado, el informe que presentó el Tribunal de Cuentas del Valle en esos años, y que arrojó un déficit estructural de 1 millón de euros, dejaba claro que eran todos los ciudadanos españoles los que finalmente abonaban tal pérdida, lo que obligaba a investigar el manejo administrativo del mausoleo de acuerdo con las normas de transparencia que exige el Estado.

La urgente necesidad de cambio en la administración de Patrimonio Nacional implicaría registrar de forma separada las facturas que llegaban del Valle. En otras palabras, se debería presentar una contabilidad propia singularizada, aplicable no solo al Valle, sino a cada uno de los patronatos reales. Sea como fuese, Patrimonio Nacional era y sigue siendo solo uno de los actores involucrados.

3.2 La abadía de la orden benedictina: entre vocación de servicio, rentas y *Booking.com*

El decreto de 1957 impuesto por Franco permitió que los monjes pertenecientes a la «Gloriosa Orden de San Benito» fuesen los gestores del conjunto monumental mediante la creación de un instrumento netamente franquista y opaco: la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Según los deseos del dictador, debían irse a vivir al Valle de Cuelgamuros al menos veinte monjes, con el fin de cumplir los siguientes mandatos: «mantener el culto en todo su esplendor», «dirigir la escolanía», «recopilar la doctrina de los pontífices» y «rogar a Dios por las almas de los muertos en la Cruzada Nacional». A cambio de estas labores, los monjes de la abadía iban a ser mantenidos con fondos públicos, situación que se alargó hasta el año 2018.

Los mandatarios a cargo de la abadía benedictina fueron, primero, fray Justo Pérez de Urbel, fallecido en 1976. Había sido consejero de Falange, luego del Movimiento y, más tarde, procurador en las Cortes. El segundo abad, Luis María de Lojendio, fallecido en 1987, había sido militante de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), además de

director de la Oficina de Información Diplomática en la dictadura. Los abades Emilio María Aparicio, fallecido en 1988, y Ernesto Dolado, fallecido en 2004, a quienes se les atribuye un intento de desideologizar la comunidad para imprimir en el Valle otro carácter, fueron seguidos por fray Anselmo Álvarez Navarrete. Este volvió a adoptar una postura ultracatólica y franquista. Su renuncia en el año 2014 fue seguida por la asunción del prior y nuevo administrador Santiago Cantera, que se enfrentaría a la exhumación de los restos del dictador, acaecida el 24 de octubre de 2019.¹⁶ En una entrevista personal concedida a las autoras de este artículo meses antes de la exhumación, el prior había insistido en que toda la gestión del Valle, su entorno natural y los monumentos deberían ser gestionados por la orden religiosa, por ser una concesión papal. Según Cantera, «el único régimen jurídico legítimo del Valle está representado por la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que es “la verdadera propietaria del mausoleo”, en tanto que la abadía es la encargada de realizar los “finances fundacionales”». Por tanto, para el religioso, que se basa en los documentos que en su momento configuró el Caudillo, «el Valle no es ni de Patrimonio Nacional, ni del Estado español», sino que «es una fundación pía erigida en su momento por la máxima autoridad eclesiástica, Pío XII, y, como tal, es autónoma» (Cantera 2018). En otras palabras, el prior sostenía que la verdadera propietaria del Valle no es la abadía ni tampoco Patrimonio, sino la Fundación de la Santa Cruz, abalada por el derecho pontificio, en la que los benedictinos mantienen una gestión especial de la basílica pontificia por delegación de Juan XXIII y, anteriormente, Pío XII. El problema, según el prior, es que no se acatan los «documentos fundacionales», en los que se especifican todas las cláusulas relacionadas con la gestión de la finca, el monumento, la abadía y demás; y, por tanto, ha habido «una falta de cumplimiento de una de las partes desde 1958» (Cantera 2018). Una situación similar atañería a todos los ingresos del Valle, ya que estos son «bienes de la fundación». En ese sentido, Cantera se opone al concepto de subvención. Insiste en que la abadía recibe una «asignación de bienes

¹⁶ El nuevo lugar de enterramiento, el cementerio de Mingorrubio, recibirá 51.546 euros durante los próximos dos años en concepto de seguridad por parte del Gobierno debido a su «evidente singularidad», según un artículo del 27 de abril de *El País* disponible en <https://elpais.com/espana/2020-04-27/el-gobierno-justifica-nuevos-gastos-en-el-panteon-de-franco-en-su-evidente-singularidad.html>.

para cumplir con los fines fundacionales». La confusión, según él, es explotada por los medios de comunicación. Lo mismo sucedería con el argumento de que el Valle es deficitario: «El problema es que las ganancias que se perciben por el Valle son redirigidas a otros monumentos que sí son deficitarios, como lo es el Palacio de Aranjuez».

Asimismo, en la entrevista reiteró que «no se había entendido, y más aún, que se había tergiversado la auténtica y original vocación de reconciliación y concordia del Valle de los Caídos, idea que, junto al concepto de justicia social, habían sido el propósito del Centro de Estudios Sociales». También se quejó de la estigmatización y de los estragos que había sufrido el Valle al ser sacado de las rutas turísticas y de los paquetes que lo incluían en las visitas al monasterio de El Escorial, y, luego, por su cierre entre los años 2009 y 2012. En su opinión, la imposibilidad de visitar la cruz, la clausura del funicular y, más tarde, la elevación de la tarifa de visita de cinco a nueve euros dejaron al Valle en un estado deficitario y en una situación de desventaja cuando antes había sido el tercer monumento más visitado de España (Cantera 2018).¹⁷

Más allá de la narrativa propuesta por el prior para solventar el control de la orden sobre el Valle, no deja de ser llamativa la forma en que resumió la complejidad de la cuestión, que pone a los monjes en el ojo del huracán: «El Valle es una patata caliente y nosotros estamos en el medio de la polémica» (Cantera 2018).

Sea como fuese, queda claro que hay una serie de actividades por prestación de servicios, como la hospedería anunciada en portales comerciales como *Booking*, y que supone alojamiento, comidas, organización de eventos y demás, que no presentan acuse de recibo. Lo mismo sucede con la administración de la escuela, el internado donde duermen los pupilos, así como con la realización de bodas y de ceremonias religiosas en la basílica, y con la organización de seminarios y de actividades empresariales que se publicitan en distintas plataformas.¹⁸ Si en enero del 2018 el prior Santia-

17 En 2018 visitaron el Valle 378.875 personas, un 33 % más que en 2017, según Patrimonio Nacional. Las cifras están lejos del más de medio millón de personas que pasaron por el monumento franquista en 2001 (*La Vanguardia*, 10 oct. 2019).

18 Véase, entre muchos otros, el artículo de Asier Martierena, «500 Euros, el precio de casarse en el Valle de los Caídos» (*La Vanguardia*, 18 jul. 2017).

go Cantera admitió que la situación administrativa del Valle era confusa, un año después el gerente del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, Ernesto Abati, aludió a las dificultades a que se enfrentaba su organismo, dada la falta de cooperación de la comunidad benedictina: la compañía religiosa no presentaba ningún informe de cuentas referente a sus gastos e ingresos con respecto a la abadía, a la escolanía y a la hospedería. La falta de claridad en sus cuentas obligó a Patrimonio Nacional a suspender en febrero de 2019 las transferencias a la orden benedictina. Según Abati (2019), la no publicación de las cuentas se debe a la falta de acuerdo sobre la gestión del Valle, anomalía no resuelta que corresponde al Gobierno solucionar a partir de una ley que defina su carácter fiscal.

Desde la sociedad civil, es ilustrativa la queja de Eduardo Ranz, abogado y querellante en defensa de las víctimas del franquismo y avalado por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Ranz hizo público el malestar ciudadano y la necesidad de exigir al Estado que pidiese una contabilidad detallada a la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Según este querellante, la fundación no contó con CIF ni cuenta corriente hasta el año 2015, uno de los motivos que dificultaba un seguimiento apropiado de sus gastos e ingresos. Más aún, Ranz criticó en el año 2017 que los datos ofrecidos por el Gobierno sobre el Valle de los Caídos revelaban que las entidades involucradas no publicaban sus cuentas y que la abadía no declaraba las operaciones comerciales y la explotación de los negocios que se llevaban a cabo en el Valle, como tampoco las donaciones que recibía de los fieles o de entidades. Al no declarar donaciones (entre ellas las recibidas de las comunidades autónomas en concepto de mantenimiento del Valle) no era posible verificar que no hayan sido usadas para otros fines, ni que no entrasen en conflicto con la subvención anual de 340.000 euros de Patrimonio Nacional. Frente a su total omisión de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, Ranz denunció la opacidad que envolvía al Valle diciendo que era «un paraíso fiscal en plena meseta» (Velasco 2017). Más allá de las exageraciones, la acusación sigue siendo una asignatura pendiente tanto para las autoridades estatales como para la sociedad civil.

4 Observaciones finales

El Valle de los Caídos, el mayor cementerio de la Guerra Civil según el informe de la Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos, funciona como un sismógrafo que nos permite apreciar la intensidad del debate en torno a los aciertos y a las deficiencias de la nueva democracia española. La exhumación de los restos del dictador que tuvo lugar el 24 de octubre de 2019, y que representaba una de las principales demandas de los familiares de víctimas republicanas enterradas en el Valle, tuvo lugar sin mayores inconvenientes. Más allá del ruido mediático y de las ganancias políticas inmediatas de un partido o de otro, el hecho no dejaba de ser un buen presagio para un futuro complejo y desbordante de desafíos. Es de esperar que la pandemia desatada por el coronavirus y la consecuente crisis sanitaria, económica y sociopolítica que están afectando al Estado español desde marzo del 2020 no reviertan, aunque necesariamente desaceleren, el ímpetu de los cambios que la Administración del gobierno de coalición socialista tenía inicialmente en su agenda para rehabilitar y resignificar el conjunto del Valle de los Caídos.

Asumimos, no obstante, que la economía de la memoria se entrelaza con los ciclos económicos nacionales y globales, con resultados diversos. La ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), el mayor centro de represión clandestino durante la última dictadura militar argentina y considerada hoy como un ejemplo paradigmático de resignificación y de educación democrática dentro de la justicia transicional, inició su largo proceso de reconversión en los primeros años del nuevo milenio. Para entonces, Argentina estaba inmersa en uno de sus peores ciclos de crisis social, económica y política, desatado en diciembre de 2001, con la imposición de las medidas bancarias conocidas popularmente con el diminutivo «corralito». La profunda resignificación de la ESMA, iniciada en el caótico contexto argentino, no deja de ofrecer un destello de esperanza para que también los españoles, sean cuales sean las dificultades coyunturales —políticas, económicas o de otra índole—, puedan decir de forma unánime: «Nunca más».

Bibliografía

- Abati, Ernesto. 2019. Entrevista con Irene Rincón Narros. 23 dic. Palacio Real de Madrid.
- Beaumont Esandi, Eurne, y Fernando Mendiola Gonzalo. 2004. «Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores: Castigo político, trabajos forzados y cautividad». *Revista de Historia Actual* 2 (2): 31–48.
- Berger, Stefan; Cento Bull, Anna, y Hans Lauge Hansen. 2017. «Agonistic Memory: Interview with Stefan Berger, Anna Cento Bull and Hans Lauge Hansen». *Traces*. <http://www.traces.polimi.it/index.html?p=1941.html>.
- Bilbija, Ksenija, y Leigh A. Payne, ed. 2011. *Accounting for Violence: Marketing Memory in Latin America*, Durham: Duke University Press.
- Box, Zira. 2010. *España, año cero. La construcción simbólica del franquismo*. Madrid: Alianza.
- Cabrera, Mercedes, y Antonio del Rey. 2002. *El poder de los empresarios*. Madrid: Taurus.
- Cantera, Santiago. 2018. Entrevista con Irene Rincón Narros. 2 feb. Valle de los Caídos.
- Calleja, José María. 2009. «Llamadle Cuelgamuros». *El País*, 3 mayo. https://elpais.com/diario/2009/05/03/domingo/1241322760_850215.html.
- Castro, Luis. 2008. *Héroes y caídos. Políticas de la memoria en la España contemporánea*. Madrid: Los Libros de la Catarata.
- Comisión de Expertos sobre el Futuro del Valle de los Caídos. 2011. *Informe de la Comisión de Expertos sobre el Futuro del Valle de los Caídos*. Madrid: Ministerio de la Presidencia.
- Confino, Alon, y Peter Fritzsche. 2002. «Introduction: Noises of the Past». Dentro Alon Confino y Peter Fritzsche, ed., *The Work of Memory: New Directions in the Study of German Society and Culture*, 1–21. Urbana: University of Illinois Press.
- Corning, Amy, y Howard Schuman. 2015. *Generations and Collective Memory*. Chicago: University of Chicago Press.
- Eusko Ikaskuntza. Sin fecha. Auñamendi Eusko Entziklopedia - Fondo Bernardo Estornés Lasa. <http://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/es/>.
- Finkelstein, Norman. 2000. *The Holocaust Industry. Reflections on the Exploitation of Jewish Suffering*. Londres / Nueva York: Verso Books.
- Forbes, Neil; Page, Robin, y Guillermo Pérez, ed. 2009. *Europe's Deadly Century: Perspectives on 20th Century Heritage*. London: English Heritage.
- Fuentes Vega, Alicia. 2017. «The politics of memory, tourism and dictatorship: revisiting Franco's Valley of the Fallen». *Journal of Tourism History* 9 (1): 70–91. doi: <https://doi.org/10.1080/1755182X.2017.1348545>.
- Giménez Caballero, Ernesto. 2009 [1935]. *Arte y Estado*, edición y prólogo de Enrique Selva. Madrid: Biblioteca Nueva.
- Gómez Bravo, Gutmaro. 2008. «La política penitenciaria del franquismo y la consolidación del Nuevo Estado». *Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales* 61: 165–197.

- González Cortés, José Ramón. 2011. «Esclavizar para vencer y convencer: los batallones de trabajadores y el trabajo forzado en el sistema represivo franquista». *Revista de Estudios Extremeños* 67 (2): 1013–1050.
- González Cuevas, Pedro Carlos. 2016. «De historia y “memoria”. La ofensiva contra el Valle de los Caídos». *Razón Española* 65 (195): 9–41.
- Gutiérrez Molina, José Luis. 2017. «José Banús Masdeu (1906–1984)». Dentro Eugenio Torres Villanueva, ed., *Cien empresarios madrileños*, 498–493. Madrid: LID.
- Halbwachs, Maurice. 1925. *Les cadres sociaux de la mémoire*. París: Librairie Félix Alcan.
- Herrera Gil, Carlos. 2013. «Banús (1960–1980): de la ciudad imposible al valor de lo propio». Tesis doctoral, Universidad de Málaga.
- Hurtado, Antonio. 2018. Entrevista con Irene Rincón Narros. 21 feb. Congreso de los Diputados, Madrid.
- LaCapra, Dominick. 1999. «Trauma, Absence, Loss». *Critical Inquiry* 25 (4): 696–727. doi: <https://doi.org/10.1086/448943>.
- Lafuente, Isaías. 2018 [2002]. *Esclavos por la patria. Un antídoto contra el olvido de la historia*. Barcelona: Planeta.
- Maestre, Antonio. 2019. *Franquismo* S. A. Madrid: Akal.
- Martariena, Asier. 2018. «500 euros, el precio de casarse en el Valle de los Caídos». *La Vanguardia*, 18 jul. <https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20180720/45919006516/500-euros-cura-parte-precio-boda-valle-caidos.html>.
- Méndez, Diego. 1959. «El Valle de los Caídos». *Informes de la construcción* (12) 116. Madrid: CSIC. doi: <https://doi.org/10.3989/ic.1959.v12.i116.5302>.
- . 1982. *El Valle de los Caídos. Idea, proyecto y construcción*. Madrid: Fundación Nacional Francisco Franco.
- Michonneau, Stéphane. 2017. *Fue ayer. Belchite, un pueblo frente a la cuestión del pasado*. Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza.
- Moradiellos, Enrique. 2000. *La España de Franco (1939–1975): política y sociedad*. Madrid: Síntesis.
- Moya, Luis. 1940. «Sueño arquitectónico para una exaltación nacional». *Revista Vértice* (36) 7: 11.
- Nora, Pierre. 1989. «Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire». *Representations* 26: 7–24.
- Ortiz, Carmen, coord. 2013. *Lugares de represión, paisajes de la memoria. Aspectos materiales y simbólicos de la cárcel de Carabanchel*. Madrid: La Catarata.
- Pascual, Alfredo. 2019. «Antonio Maestre: “El franquismo fulminó las empresas de la República y conformó el IBEX”». *El Confidencial*, 1 nov. https://www.elconfidencial.com/cultura/2019-11-01/antonio-maestre-franquismo-sa-libro-politica-ibex_2306812/.
- Patrimonio Nacional. 1970. *Santa Cruz del Valle de los Caídos*. Madrid: Patrimonio Nacional.
- Pérez de Urbel, Justo, 1938. «El arte y el Imperio». *Jerarquía. La revista negra de la Falange* 3: 71–89.

- Pérez de Úrbel, Justo. 1959. *El monumento de Santa Cruz del Valle de los Caídos*. Madrid: Instituto de Estudios Madrileños.
- Pires Jiménez, Luis Eduardo. 2005. «Los empresarios y el Estado en torno a las intervenciones del régimen de Franco: la regulación de la inversión industrial (1938–1963)». *Investigaciones de Historia Económica* 2: 145–178.
- Richards, Michael. 2001. *Un tiempo de silencio. La Guerra Civil y la cultura de la represión en la España de Franco*. Barcelona: Crítica.
- Rothberg, Michael. 2009. *Multidirectional Memory: Remembering the Holocaust in the Age of Decolonization*. Stanford: Stanford University Press.
- Sánchez, Glicerio. 2003. «El franquismo como red de intereses». Dentro Glicerio Sánchez y Julio Tascón, ed., *Los empresarios de Franco. Política y economía en España, 1936–1957*, 13–22. Barcelona: Crítica.
- Sánchez, Glicerio, y Julio Tascón, ed. 2003. *Los empresarios de Franco. Política y economía en España, 1936–1957*. Barcelona: Crítica.
- Sánchez Soler, Mariano. 2003. *La familia Franco, S. A. Negocios y privilegios de la saga del último dictador de Occidente*. Madrid: Oberon.
- Santiáñez, Nil. 2013. *Topographies of Fascism. Habitus, Space and Writing in Twentieth-Century Spain*. Toronto: University of Toronto Press.
- . 2007. «Mirada cartográfica y voluntad-de-arquitectura en la obra fascista de Ernesto Giménez Caballero». *Bulletin of Spanish Studies* 84: 325–347.
- Sevcenko, Liz. «Sites of Conscience: Heritage of and for Human Rights». Dentro Helmut Anheier y Yudhishtir Raj Isar, ed., *Heritage, memory and identity*, 114–123. Los Ángeles / Londres: Sage.
- Shauli, Ran, y Silvina Schammah Gesser. 2016–2019. *Does It Pay to Remember? The Economy of Memory in Comparative Perspective: Cases from Southeast Asia, South America and Southern Europe*, proyecto de investigación. Instituto S. Harry Truman para la Promoción de la Paz, Universidad Hebrea de Jerusalén.
- Sion, Brigitte. 2008. «Absent Bodies, Uncertain Memorials. Performing memory in Berlin and Buenos Aires». Tesis doctoral, New York University.
- Sorensen, Marie Louise Stig, y Dacia Viejo-Rose, ed. 2015. *War and Cultural Heritage. Biographies of Place*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sueiro, Daniel. 1976. *La verdadera historia del Valle de los Caídos*. Madrid: Sedmay.
- Suleiman, Susan Rubin. 2006. *Crises of Memory and the Second World War*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Toboso Sánchez, Pilar. 2007. «Empresarios y política en la dictadura de Franco». *Ayer* 66 (2): 143–173.
- Torres, Eugenio. 2003a. «La empresa en la autarquía 1939–1959. Iniciativa pública versus iniciativa privada». Dentro Carlos Barciela, ed., *Autarquía y mercado negro*, 169–216. Barcelona: Crítica.
- . 2003b. «Comportamientos empresariales en una economía intervenida: España, 1936–1957». Dentro Glicerio Sánchez y Julio Tascón, ed., *Los empresarios de Franco. Política y economía en España, 1936–1957*, 199–224. Barcelona: Crítica.

- Torres, Javier. 2016. «La guerra entre el abad y Carrero Blanco por el Valle de los Caídos» *Cadena Ser*, 20 nov. https://cadenaser.com/ser/2016/11/16/cultura/1479295281_046777.html.
- Torrús, Alejandro. 2017 [2012]. «Del Valle de los Caídos al Ibex 35». *Público*, 18 nov. <http://www.publico.es/espana/del-valle-caidos-al-ibex.html>. [Consulta: 11 enero 2020.]
- Velasco, Pilar. 2017. «El Valle de los Caídos arroja un déficit público de 2,3 millones en tres años». *Cadena Ser*, 8 mayo. https://cadenaser.com/ser/2017/05/07/tribunales/1494169723_401182.html.
- Winter, Jay. 2000. «The Generation of Memory: Reflections on the Memory Boom», *Contemporary Historical Studies. German Historical Institute Bulletin* 27: 1–13.
- La Vanguardia. «Valle de los Caídos: casi 400.000 visitas y 1,5 millones en venta de entradas». *La Vanguardia*, 10 oct. <https://www.lavanguardia.com/vida/20191010/47893404500/valle-de-los-caidos-casi-400000-visitas-y-15-millones-en-venta-de-entradas.html>.

This work is subject to a [Creative Commons Attribution 4.0 International Public License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).